



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

**JUZGADO QUINTO PENAL MUNICIPAL CON  
FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS  
CARTAGO- VALLE**

**INCIDENTE DE DESACATO  
ACCIÓN DE TUTELA No. 76-147-40-88-005-2024-00373-00  
ACCIONANTE: JAIRCINHO MOCALEANO BALLESTEROS  
ACCIONADO: LIBERTY SEGUROS SA**

**AUTO INTERLOCUTORIO No. 157**

Cartago (Valle), diecinueve (19) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

**ASUNTO**

Decidir la etapa a seguir dentro de la presente diligencia sobre solicitud de trámite incidental por desacato presentado por el ciudadano **JAIRCINHO MOCALEANO BALLESTEROS**, en contra de **LIBERTY SEGUROS SA ahora HDI SEGUROS COLOMBIA SA**, debido a que, a la fecha no le ha dado efectivo cumplimiento a lo contenido en sentencia de tutela 366 del 27 de diciembre de 2024, pues a la fecha no ha efectuado las acciones pertinentes para que se lleve a cabo el examen de pérdida de capacidad laboral del señor **JAIRCINHO MOCALEANO BALLESTEROS**.


**CONSIDERACIONES**


En razón a que la parte incidentada no acreditó el cumplimiento de la sentencia de tutela No. 366 del 27 de diciembre de 2024, emitida por este Despacho, dentro del término concedido por la Judicatura, mediante Auto de Sustanciación No. 131 del 11 de febrero de 2025, por el cual se otorgó el plazo perentorio de dos (02) días, que fenecieron el día catorce (14) de febrero de 2025 a las 17:00 horas, toda vez que la entidad fue notificada el 11 de febrero de 2025.

Por parte de la demandada se informó que, el día 08 de enero de 2025 procedieron con el pago equivalente al salario mínimo legal mensual y remitieron la solicitud a la Junta Regional de Calificación, con el fin de que efectúen el dictamen de pérdida de capacidad laboral al señor **JAIRCINHO MOCALEANO BALLESTEROS**. Dicha entidad allegó pantallazos de lo mencionado, pero no se evidencia comprobante de entrega satisfactoria en buzón de correo electrónico.





**SOPORTE DE PAGO:**

[illegible]


**SOLICITUD DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE TUTELA JAIRCINHO MONCALEANO- CM**




**Lopez, Kherynn**  
 Para [Solicitudes@juntavalle.com](mailto:Solicitudes@juntavalle.com)  
 CC [jairc29-08@hotmail.com](mailto:jairc29-08@hotmail.com)  
 CCO [Castillo Arias, Danna Lorena](#); [Facturacion](#)


Responder


Responder a todos

Reenviar




mié 8/01/2025 4:55 p.m.



 Internal



**SOLICITUD DE CALIFICACION DE CUMPLIMIENTO JAIRCINHO MONCALEANO.pdf**  
 203 KB



**Certificado Existencia.pdf**  
 574 KB



**SOPORTE DE PAGO JAIRCINHO MONCALEANO.pdf**  
 250 KB

Bogotá D.C., 08 de enero de 2025

Señores

**JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE VALLE DEL CAUCA**  
 Calle 5E No. 42-44 Barrio Tequendama  
[Solicitudes@juntavalle.com](mailto:Solicitudes@juntavalle.com)

**FALLO DE ACCION DE TUTELA**  
**RADICADO: 2024-0373**

Posteriormente, dentro de la contestación allegada por la **JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DEL VALLE DEL CAUCA**, se indicó que, a la fecha no cuenta con solicitud elevada a favor del señor **JAIRCINHO MOCALEANO BALLESTEROS**.

**Acciones encaminadas al cumplimiento de la orden judicial:**

**PRIMERO:** Se consulta el departamento de **REPARTO** de la Junta Regional NO se evidencia solicitud de calificación a nombre del señor **JAIRCINHO MONCALEANO BALLESTEROS**, identificado con número de cédula de ciudadanía número **9.773.431**, con el lleno de los requisitos de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.5.1.28 del Decreto 1072 de 2015, por lo que para la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, es imposible realizar calificación sin tener expediente alguno a nombre de la accionante, ajustado a la norma.

Se solicita al (la) señor (a) Juez Constitucional muy respetuosamente que por intermedio del despacho judicial se requiera a la parte interesada radicar en la Junta Regional el expediente ajustado a los requisitos mínimos que debe contener el mismo para solicitar la calificación de pérdida de capacidad laboral en la Junta Regional dispuestos en el artículo 2.2.5.1.28 del Decreto 1072 de 2015.

Habida cuenta que, de los términos otorgados por el legislador en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, no es viable la aplicación de principios generales del Código de General del Proceso, al ser éste un trámite especial dado el objeto perseguido, cual es el amparo de derechos vulnerados o sobre los cuales se cierne la amenaza de vulneración, siendo obligatorio el cumplimiento inmediato del fallo, con el respeto de las garantías legales y constitucionales del debido proceso.

Al respecto, la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-367 de 2014, indicó que la decisión del incidente de desacato debe adoptarse dentro de los 10 días siguientes a la radicación de la respectiva solicitud, en el marco del análisis efectuado al artículo 52 del Decreto estatutario 2591 de 1991 en sede de control abstracto.

En esa providencia, la Corte señaló que no es posible aplicar en este caso el artículo 4 del Decreto 306 de 1992 y, por consiguiente, el artículo 137 del Código de Procedimiento Civil o el artículo 129 del Código General del Proceso, porque el incidente de desacato a un fallo de tutela es un incidente especial. La especialidad de este incidente viene dada en la característica del amparo de un derecho fundamental trasgredido o amenazado que exige inmediato cumplimiento.

En esa medida, consideró que al regular la Constitución la acción de tutela, en su artículo 86, y precisar que tanto la protección de los derechos como el cumplimiento de los fallos deben ser inmediatos, esta no debe superar los diez días, de este mandato se sigue que para resolver el trámite incidental de desacato a un fallo de tutela no habrán de transcurrir más de diez días, contados desde su apertura.

El alto Tribunal en Materia Constitucional ha reiterado que dada la naturaleza especial que tiene el incidente de desacato, el juez que conoce del mismo no puede volver sobre los juicios o las valoraciones que hayan sido objeto de debate en el respectivo proceso de tutela, ya que ello implicaría *"revivir un proceso concluido afectando de esa manera la institución de la cosa juzgada"*. De acuerdo con lo anterior, el ámbito de acción del operador judicial en este caso está definido por la parte resolutive del fallo correspondiente. En este orden de ideas, la autoridad judicial que decide el desacato debe limitarse a verificar:

*"(1) a quién estaba dirigida la orden;*

*(2) cuál fue el término otorgado para ejecutarla;*

*(3) y el alcance de la misma. Esto, con el objeto de concluir si el destinatario de la orden la cumplió de forma oportuna y completa (conducta esperada). (Sentencias T-553 de 2002 y T-368 de 2005).*

*Adicionalmente, el juez del desacato debe verificar si efectivamente se incumplió la orden impartida a través de la sentencia de tutela y, de existir el incumplimiento, debe identificar si fue integral o parcial. Una vez verificado el incumplimiento debe identificar las razones por las cuales se produjo con el fin de establecer las medidas necesarias para proteger efectivamente el derecho (...)"*.

Por otro lado, sin desconocer que el trámite incidental de desacato debe tramitarse al igual que la tutela de manera expedita, es obligación del juez garantizar los derechos al debido proceso y de defensa de la persona contra quien se ejerce, en virtud de lo cual deberá: *"(1) comunicar al incumplido sobre la iniciación del mismo y darle la oportunidad para que informe la razón por la cual no ha dado cumplimiento a la orden y presente sus argumentos de defensa. Es preciso decir que el*

*responsable podrá alegar dificultad grave para cumplir la orden, pero sólo en el evento en que ella sea absolutamente de imposible cumplimiento, lo cual debe demostrar por cualquier medio probatorio; así mismo, debe (2) practicar las pruebas que se le soliciten y las que considere conducentes son indispensables para adoptar la decisión; (3) notificar la decisión; y, en caso de que haya lugar a ello, (4) remitir el expediente en consulta ante el superior”.*

Además, siendo el incidente de desacato un mecanismo de coerción que tienen a su disposición los jueces en desarrollo de sus facultades disciplinarias, el mismo está cobijado por los principios del derecho sancionador, y específicamente por las garantías que éste otorga al disciplinado.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que a la fecha el ente accionado ha perpetuado el desacato al mandato constitucional en otrora impartido, se dispondrá entonces iniciar el trámite incidental por desacato, en aplicación a lo dispuesto por el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.

En consecuencia, habrá lugar a tener como parte incidentante -demandante- en este trámite, al ciudadano **JAIRCINHO MOCALEANO BALLESTEROS** y como parte incidentada -demandada, al **Dr. MAURICIO ANDRÉS CLEVES CALDERÓN, en calidad de representante legal para asuntos judiciales de HDI SEGUROS COLOMBIA SA**, responsable del acatamiento del fallo tutelar.

De igual manera, se requerirá al **Dr. CESAR ALBERTO RODRIGUEZ SEPULVEDA en calidad de presidente de HDI SEGUROS COLOMBIA SA**, quien funge como superior jerárquico del **Dr. MAURICIO ANDRÉS CLEVES CALDERÓN, en calidad de representante legal para asuntos judiciales de HDI SEGUROS COLOMBIA SA**, con el objeto, que adelante los trámites que sean indispensables, a fin de obtener el cumplimiento de la orden constitucional en otrora impartida, además de solicitar que abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra el responsable del acatamiento de la Sentencia de Tutela en comento.

Así las cosas, tal y como lo norma el artículo 129 del Código General del Proceso, se ordenará correr traslado por el término de tres (3) días del escrito de incidente a la parte incidentada, para que contesten y pidan las pruebas que pretendan hacer valer en su favor y acompañen los documentos y pruebas anticipadas que se encuentren en su poder en caso de que no obren en el expediente, vencido dicho plazo sin evidenciar por parte del ente demandado cumplimiento a la orden judicial en comento, o argumento que justifique objetivamente su actuar omisivo, que al efecto desvirtúe la hasta ahora aparente desatención negligente, crasa y dolosa de la obligación legal, se dará trámite a la etapa sancionatoria, como quiera que oficiosamente no se dispondrá el decreto de pruebas, más que las previamente allegadas por el libelista al infolio, toda vez que el procedimiento especial que nos atañe es distinto al regulado en el Código de Procedimiento Civil para el trámite de las sanciones que el Juez impone en ejercicio del poder disciplinario que se le ha conferido, en atención a lo expuesto por el Alto Tribunal en la Sentencia de Constitucionalidad- 367 de 2014 en cuyo numeral 4.4.1.2., establece:

*“...4.4.1.2.2. Conforme a la interpretación que este tribunal ha hecho del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991<sup>1</sup>, no es posible aplicar en este caso el artículo 4 del Decreto 306 de 1992 y, por consiguiente, el artículo 137 del Código de Procedimiento Civil o el artículo 129 del Código General del Proceso, porque el incidente de desacato a un fallo de tutela es un*

---

<sup>1</sup> Supra II, 2.6.2. y 2.7.2.

*incidente especial. La especialidad de este incidente viene dada por la especialidad de lo que está en juego en un fallo de tutela, que es nada más y nada menos que amparar un derecho fundamental que ha sido vulnerado o sobre el cual se cierne la amenaza de vulneración, de tal suerte que dicho fallo es de inmediato cumplimiento, según lo previsto en el artículo 86 de la Constitución.*

*(...) A pesar de ser un trámite breve, en todo caso se debe comunicar la iniciación del incidente a la persona de quien se afirma ha incurrido en desacato, para que pueda ejercer su derecho a la defensa y aportar o solicitar las pruebas necesarias para demostrar el cumplimiento del fallo de tutela o la imposibilidad de dicho cumplimiento, pues para que se configure el desacato se requiere, entre otras condiciones, demostrar la responsabilidad subjetiva (dolo o culpa) de la persona incumplida y el vínculo de causalidad entre ésta y el incumplimiento<sup>2</sup>. Para resolver el trámite incidental de desacato a un fallo de tutela es imperioso respetar el principio de necesidad de la prueba, como elemento esencial del derecho a la defensa y del debido proceso, al punto de que, en casos excepcionálísimos, siempre y cuando haya una justificación objetiva y razonable, consignada en una providencia judicial, si la práctica o recaudo de la prueba supera el antedicho término, el juez pueda excederlo para analizar y valorar esta prueba y tomar su decisión.*

*(...)*

*1.2. En el análisis del cargo planteado se estudió, en general, el deber de acatar las providencias judiciales y los poderes del juez para hacerlas cumplir y, en especial, el deber de acatar los fallos de tutela, los poderes del juez para hacerlos cumplir y las responsabilidades que pueden seguirse de su incumplimiento. A partir de estos parámetros se descendió al caso concreto, para examinar el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 a la luz de los anteriores parámetros, encontrando que (i) el incidente allí previsto no tiene un término determinado en el Decreto 2591 de 1991, ni determinable a partir de otras normas jurídicas, y que (ii) esta omisión afecta una condición o ingrediente que, conforme a la Constitución sea una exigencia esencial para armonizar con ella, de tal suerte que se configura una omisión legislativa relativa. Ante esta grave situación, este tribunal, sin dejar de reconocer que el legislador puede fijar un término en la ley para resolver el trámite incidental de desacato a un fallo de tutela, acudió al artículo 86 de la Constitución, que regula la acción de tutela, en el que encontró un criterio fundado para determinar, de manera objetiva y razonable, cómo podría entenderse en el tiempo el mandato constitucional de que la protección de los derechos fundamentales y el cumplimiento de los fallos de tutela sean inmediatos, como es el de que para resolver el trámite incidental de desacato a un fallo de tutela en ningún caso podrán transcurrir más de diez días, contados desde de su apertura.*

*1.2. En el análisis del cargo planteado se estudió, en general, el deber de acatar las providencias judiciales y los poderes del juez para hacerlas cumplir y, en especial, el deber de acatar los fallos de tutela, los poderes del juez para hacerlos cumplir y las responsabilidades que pueden seguirse de su incumplimiento. A partir de estos parámetros se descendió al caso concreto, para examinar el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 a la luz de los anteriores parámetros, encontrando que (i) el incidente allí previsto no tiene un término determinado en el Decreto 2591 de 1991, ni determinable a partir de otras normas jurídicas, y que (ii) esta omisión afecta una condición o ingrediente que, conforme a la Constitución sea una exigencia esencial para armonizar con ella, de tal suerte que se configura una omisión legislativa relativa. Ante esta grave situación, este tribunal, sin dejar de reconocer que el legislador puede fijar un término en la ley para resolver el trámite incidental de desacato a un fallo de tutela, acudió al artículo 86 de la Constitución, que regula la acción de tutela, en el que encontró un criterio fundado para determinar, de manera objetiva y razonable, cómo podría entenderse en el tiempo el mandato constitucional de que la protección de los derechos fundamentales y el cumplimiento de los fallos de tutela sean inmediatos, como es el de que para resolver el trámite incidental de desacato a un fallo de tutela en ningún caso podrán transcurrir más de diez días, contados desde de su apertura.*

*(...)*

## **2. Razón de la decisión.**

---

<sup>2</sup> Supra II, 4.3.4.9.

*2.2. Al regular la Constitución la acción de tutela, en su artículo 86, y precisar que tanto la protección de los derechos como el cumplimiento de los fallos deben ser inmediatos, y disponer que dicha inmediatez no debe superar los diez días, de este mandato se sigue que para resolver el trámite incidental de desacato a un fallo de tutela no habrán de transcurrir más de diez días, contados desde su apertura.*

*2.3. En casos excepcionalísimos, (i) por razones de necesidad de la prueba y para asegurar el derecho de defensa de la persona contra la cual se promueve el incidente de desacato, (ii) cuando exista una justificación objetiva y razonable para la demora en su práctica y (iii) se haga explícita esta justificación en una providencia judicial, el juez puede exceder el término del artículo 86 de la Constitución, pero en todo caso estará obligado a (i) adoptar directamente las medidas necesarias para la práctica de dicha prueba respetando el derecho de defensa y (ii) a analizar y valorar esta prueba una vez se haya practicado y a resolver el trámite incidental en un término que sea razonable frente a la inmediatez prevista en el referido artículo...”  
Subraya fuera de texto.*

De otro lado, es menester respetar el principio de necesidad de la prueba, dada la esencialidad del debido proceso, y el derecho de controversia litigiosa, motivo por el cual se tendrán como pruebas documentales las aportadas por la libelista al trámite incidental, es decir:

- Escrito incidental.
- Copia de la sentencia de tutela

En consecuencia se itera que, una vez fenecido el lapso de tres (3) días otorgado por la Judicatura para el debido contradictorio sin que la parte incidentada haya aportado o solicitado práctica de prueba alguna el Despacho prescindirá de la etapa probatoria, cuando quiera que el caso *Sub-Examine* no enmarca excepcionalidad, ni justificación objetiva y razonable, que amerite exceder el término máximo de diez días conferido por la Honorable Corte Constitucional para resolver el incidente de desacato contados a partir de su apertura, pues claro está que las incidentadas, retrasan injustificadamente la materialización de una orden de un juez constitucional.

Por lo brevemente expuesto, el Juzgado Quinto Penal Municipal de Cartago-Valle del Cauca,

### **R E S U E L V E:**

**PRIMERO: INICIAR** el trámite incidental por desacato, a la petición elevada por el ciudadano **JAIRCINHO MOCALEANO BALLESTEROS** contra el **Dr. MAURICIO ANDRÉS CLEVES CALDERÓN**, en calidad de representante legal para asuntos judiciales de **HDI SEGUROS COLOMBIA SA**, responsable del acatamiento del fallo tutelar.

**SEGUNDO: TENER** como parte incidentante -demandante- a este trámite, al ciudadano **JAIRCINHO MOCALEANO BALLESTEROS** y como parte incidentada -demandada-, al **Dr. MAURICIO ANDRÉS CLEVES CALDERÓN**, en calidad de representante legal para asuntos judiciales de **HDI SEGUROS COLOMBIA SA**, responsable del acatamiento del fallo tutelar.

**TERCERO:** Vincular al contradictorio a **JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DEL VALLE DEL CAUCA**.

**CUARTO:** Se insta a **HDI SEGUROS COLOMBIA SA** a que efectúe el envío de la solicitud ante **JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DEL VALLE DEL CAUCA** con copia a este **Despacho Judicial**, remitiendo en informe constancia en envío con constancia de recepción.


**QUINTO:** De conformidad a lo previsto por el artículo 129 del Código General del Proceso, se ordenará correrle traslado por el término de tres (3) días del escrito de incidente a la parte incidentada y la parte vinculada, para que conteste y pida las pruebas que pretenda hacer valer en su favor y acompañe los documentos y pruebas anticipadas que se encuentren en su poder en caso de que no obren en el expediente. Vencido dicho plazo sin evidenciar por parte del ente demandado cumplimiento a la orden judicial en comento, o argumento que justifique objetivamente su actuar omisivo, que al efecto desvirtúe la hasta ahora aparente desatención negligente, crasa y dolosa de la obligación legal, se dará trámite a la etapa sancionatoria, como quiera que oficiosamente no se dispondrá el decreto de pruebas, más que las previamente allegadas por la libelista al infolio, en tal sentido el Despacho prescinde del término probatorio.

**SEXTO:** Tener como pruebas documentales las aportadas por el libelista al trámite incidental. En igual sentido, correr traslado a las partes intervinientes de los oficios radicados por la parte actora en el curso del presente trámite.

**SÉPTIMO:** Exhortar al **Dr. CESAR ALBERTO RODRIGUEZ SEPULVEDA** en calidad de presidente de **HDI SEGUROS COLOMBIA SA**, quien funge como superior jerárquico del **Dr. MAURICIO ANDRÉS CLEVES CALDERÓN**, en calidad de representante legal para asuntos judiciales de **HDI SEGUROS COLOMBIA SA**, responsable del acatamiento del presente fallo tutelar, adelante los trámites que sean indispensables, a fin de obtener el cumplimiento de la orden constitucional en otrora impartida, además de solicitar que abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra el responsable del acatamiento de la Sentencia de Tutela en comento.

**OCTAVO: NOTIFÍQUESE** lo aquí resuelto, conforme a lo ordenado en el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991.

**NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE**



**OSCAR JAVIER TREJOS PEREZ**  
**JUEZ**